

	<b>JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI</b>
<b>Cali</b>	<b>Veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)</b>

**Auto Interlocutorio No. 384.**

<b>MEDIO DE CONTROL</b>	<b>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LESIVIDAD</b>
<b>RADICACIÓN</b>	<b>76001-33-33-001-2021-00108-00</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES</b>
<b>DEMANDADO</b>	<b>JORGE ALBERTO CUERVO GARZON</b>

**ASUNTO A RESOLVER**

Procede este despacho judicial a resolver la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la parte actora en el presente proceso, de conformidad con el artículo 233 del CPACA.

**ANTECEDENTES**

La parte accionante solicita que se disponga la **SUSPENSIÓN PROVISIONAL** de los efectos jurídicos de la Resolución No. SUB 85933 del 1º de abril de 2020, a través de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones, reconoció una pensión de vejez a favor del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón.

En el escrito de la demanda, refiere que al efectuarse el reconocimiento pensional a favor del demandando, se vulneró el artículo 48 de la Constitución Nacional, así como los artículos 34 y 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el señor Jorge Alberto Cuervo Garzón, está devengando una mesada pensional superior a la que realmente tiene derecho, bajo el siguiente argumento:

*“La liquidación inicial con los últimos 10 años se tomaron los IBC reportados por el empleador desde el mes de julio de 2009 hasta el periodo de febrero de 2020, con 1,779 semanas, aplicando un IBL por \$2.277.561, y al modificarse la historia laboral a 1,783 semanas por el ingreso del periodo de marzo de 2020, que no se había tomado en cuenta en la liquidación inicial, ocasiono que el IBL para los últimos 10 años se tomara desde el periodo de Agosto de 2009 hasta la última cotización reportada por el empleador en el mes de Marzo de 2020, lo que genero al momento de reliquidar una leve disminución en el IBL a \$2.275.033, lo cual también generó una leve disminución en la mesada pensional. Así las cosas, se informa que al realizar las operaciones aritméticas con las semanas y las cotizaciones válidamente acreditadas a la fecha, teniendo cuenta el nuevo ingreso base de liquidación (\$2.275.033), se logró establecer que la mesada correcta para el señor Cuervo Garzón Jorge Alberto, corresponde a la cuantía de (\$2, 047,530), la*



*cual es menor a la que devenga actualmente el pensionado.”*

De acuerdo con lo expuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al demandado se le reconoció la pensión de vejez de acuerdo al artículo 36 de la ley 100 de 1993 por reunir los requisitos legales; sin embargo, refiere que se incurrió en un error aritmético al momento de efectuarse el reconocimiento a través de la Resolución No. SUB 85933 del 1º de abril de 2020, al establecerse un ingreso base de liquidación de \$ 2.277.561, el cual es superior al IBL que realmente debió de tenerse en cuenta para efectos de determinar su mesada pensional, esto es un IBL de \$ 2.275.033. Esta situación, afirma que se presentó porque no se tuvo en cuenta la modificación de la historia laboral a 1.783 semanas cotizadas, por el ingreso del mes de marzo de 2020, pues en el reconocimiento inicial se realizó el cálculo de lo cotizado entre el mes de julio de 2009 hasta el periodo de febrero de 2020.

### **CONTESTACION DE LA MEDIDA CAUTELAR**

Surtido el traslado de la medida cautelar formulada por el apoderado judicial de la parte demandante, el apoderado judicial del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón, se pronunció al respecto mediante memorial allegado a través de los canales digitales del Juzgado el 03 de agosto de 2021, indicando que no se debe acceder a la medida cautelar de suspensión provisional solicitada, toda vez que hasta este momento procesal no se avizora la vulneración de las normas invocadas, pues simplemente se argumentó en la demanda que la pensión de vejez en cuestión vulnera la Ley 100 de 1993 y las leyes pensionales, porque en sentir de dicha Administradora se genera un quebrantamiento de la sostenibilidad fiscal del sistema pensional sin siquiera probar los perjuicios económicos causados, lo cual demuestra contrariedad a lo sostenido en cuando se afirmó que la pensión fue reconocida bajo un régimen especial, en tanto el accionado es beneficiario del régimen de transición de la citada ley y su situación se ajusta a lo preceptuado en el Acuerdo 049 de 1990, además no se produce una objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la cuantía de la mesada con la nueva liquidación que realiza la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Señala que el supuesto error aritmético en que se incurrió al momento de efectuarse el reconocimiento pensional, no debe ser imputado al demandado ni asumirlo en su totalidad, toda vez que la Administradora Colombiana de Pensiones, fue la entidad encargada de realizar dicha liquidación y efectuar los cálculos correspondientes, más aún si se tiene en cuenta que fue el empleador del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón quien solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de su pensión de vejez.

En ese orden de ideas, refiere que en caso de accederse a la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado, se estaría causando un perjuicio irremediable al demandado y no a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en razón a que se trata de una persona adulta mayor cuyo único sustento es la pensión que le fue reconocida por haber laborado con un sólo empleador del sector privado, más de 20 años, sin que exista mérito alguno para que se le coarte su derecho, siendo esa pensión, itero, la única fuente de sustento porque no recibe ingresos o rentas adicionales.

Finalmente, expuso lo siguiente *“COLPENSIONES para expedir el acto que se demanda, verificó que mi prohijado por ser beneficiario del régimen de transición dispuesto en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicó como*



*norma favorable el Acuerdo 049 de 1990, al cumplir satisfactoriamente con los requisitos de edad como la densidad de semanas, debiendo informar oportunamente al empleador para que éste hiciera lo pertinente, más cuando ostentaba más de 1700 semanas. Por ello, si verdaderamente existió error en la liquidación de su mesada, el mismo no puede ser imputable a mi representado”.*

## **INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO**

Mediante memorial allegado a través de los canales digitales del Juzgado el 09 de agosto de 2021, la Procuradora 57 Judicial I para Asuntos Administrativos, emitió concepto solicitando que se niegue la medida provisional solicitada, toda vez que no es posible concluir en esta etapa la existencia de una vulneración flagrante de los actos administrativos demandados respecto de las normas cuya legalidad y constitucionalidad se esgrime en la demanda, como tampoco determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, puesto, que no se encuentra configurado el requisito previsto en el artículo 231 del CAPCA consistente en que “*ii) exista una violación que “surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”*”, como quiera que de los hechos y pretensiones de la demanda, está claro que lo que se discute, no es el derecho del demandado al reconocimiento pensional, sino que lo que se cuestiona propiamente, es la liquidación que fue realizada por la hoy demandante, en lo que tiene que ver con el Ingreso Base de Liquidación versus las semanas realmente cotizadas que aparecen reportadas en la historia laboral, situación que deberá valorarse de acuerdo con el materia probatorio que se logre recaudar en el proceso y que requieren un análisis integral para decidirse de fondo al momento de proferir el fallo.

En este sentido, concluyó “*teniendo en cuenta que COLPENSIONES reconoció la pensión del actor, tomando en principio como punto de partida los aportes pensionales realizados y causación de los requisitos de edad y tiempo de servicio para estos efectos, a criterio de esta Procuraduría, no se reúne el presupuesto de procedencia de la medida cautelar consistente en “proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”*”, razón por la cual se solicitará al Despacho Judicial negar la medida cautelar planteada”.

## **CONSIDERACIONES**

La Ley 1437 de 2011 “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*” consagra de manera específica un régimen de cautelas judiciales orientado a la adecuación de los procedimientos adelantados ante esta jurisdicción, conforme a los nuevos mandatos establecidos por la Constitución Política de 1991, medidas instituidas para permitirle al administrado el acceso a una justicia mediata, instrumental, una justicia provisional que busca dotar de eficacia la tutela judicial definitiva<sup>1</sup>.

**- Requisitos para la procedencia de las medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011 – CPACA-**

---

<sup>1</sup> Ibidem.



El artículo 229<sup>2</sup> del CPACA señala que en todos los procesos declarativos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte, previo a la notificación del auto que admite la demanda o en cualquiera etapa procesal, es procedente el decreto de medidas cautelares que se estimen necesarias para salvaguardar de manera provisional el objeto de la actuación procesal y la eficacia del derecho que se declara en la sentencia, sin que el decreto de la medida implique prejuzgamiento.

Del mismo modo, la citada codificación procesal consagra en el artículo 230 numeral 3º, lo concerniente a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo sometido a control jurisdiccional, disposición normativa que en su tenor literal reza lo siguiente:

*“(...) Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares **podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión**, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:*

***3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (...).’’***

Ahora, en lo relacionado con los presupuestos jurídicos que se deben observar para decretar las medidas cautelares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 231 establece lo siguiente:

*“(...) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”. (Negrilla del Despacho)*

De este modo, lo ha planteado el Órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo<sup>3</sup>, al indicar que:

*“(...) La Constitución Política en el artículo 238<sup>4</sup> otorgó a la jurisdicción de*

---

<sup>2</sup> Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 229: Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

<sup>3</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero ponente: César Palomino Cortés, providencia del quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00032-00(3007-14).

<sup>4</sup> Constitución Política. Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.



*lo contencioso administrativo la facultad de suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.*

*El legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, amplió el catálogo de las medidas cautelares que en la Constitución Política<sup>5</sup> y en el Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,<sup>6</sup> se referían únicamente a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, por uno más extenso de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión.*

*En cuanto a la oportunidad para solicitarlas indica el artículo 229<sup>7</sup> del CPACA que, las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso, **con el fin proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.***

*Así mismo el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **prevé que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** De manera que, su procedencia está determinada por la transgresión del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva. La norma señala expresamente lo siguiente: (...)*

*Según la regla precedente, podrá decretarse la medida cautelar cuando se cumplan los siguientes requerimientos: a) que así lo solicite y fundamente en debida forma la parte interesada en la demanda o con escrito anexo a la misma; b) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; c) o que emerja de los medios de prueba aportados por el interesado y, d) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.*

*Debe indicarse como la jurisprudencia ha resaltado, que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, se trata de «mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto»<sup>8</sup>.*

---

<sup>5</sup> Constitución Política, artículo 138.

<sup>6</sup> Decreto 01 de 1984, artículo 152.

<sup>7</sup> Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.<sup>7</sup>

<sup>8</sup> Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero



De conformidad con el aparte jurisprudencial y las normas citadas, la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

- Que se trate de proceso de naturaleza declarativa.
- Que la medida cautelar se torne necesaria para proteger y garantizar, de manera anticipada y provisionalmente, el objeto del proceso.
- Que la violación surja de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud cautelar, por confrontación del acto administrativo demandado con las normas señaladas y las pruebas que soportan la solicitud.
- Prueba siquiera sumaria del perjuicio, en los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho.

Acorde con lo anterior, es a partir del análisis de los fundamentos de derecho y concepto de violación que se anuncian como trasgredidas con la expedición de los actos cuyos efectos se solicita suspender, y/o del material probatorio allegado al proceso hasta la instancia procesal de la solicitud, que el juez debe determinar si resulta viable el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

## CASO CONCRETO

En primer lugar, debe precisarse que si bien, la procedencia de la medida cautelar se justifica por la contravención palmaria y evidente del ordenamiento jurídico, para demostrar dicha situación la parte interesada debe efectuar un análisis de las disposiciones que se señalan infringidas con la decisión de la administración y acreditar probatoriamente la vulneración legal.

En este contexto, es claro que, para considerar la prosperidad de la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo demandado, a la luz de lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, es necesario que se acrediten de manera concurrente los cuatro presupuestos referenciados en líneas anteriores.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el acto administrativo demandado corresponde a la Resolución No. SUB 85933 del 1º de abril de 2020, a través de la cual la entidad accionante reconoció a favor del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón,

---

ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.

La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa [ ]. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”



una pensión de vejez, conforme a lo previsto en el Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Este reconocimiento se realizó a partir del 1º de abril de 2020, con una mesada pensional de \$ 2.049.805. Así mismo, se tuvo en cuenta las semanas cotizadas hasta el mes de febrero de 2020, lo cual correspondió a 1.779 semanas cotizadas, con un IBL de \$ 2.277.561, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 90%, arrojó una mesada pensional de \$ 2.049.805.

Así las cosas, se examinará en este caso el cumplimiento o no de los requisitos previstos en la ley, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional.

Arguye el demandante, que el acto administrativo demandado viola el artículo 48 de la Constitución Nacional, así como los artículos 34 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Manifiesta que, en el presente asunto, se han quebrantado los preceptos constitucionales y legales por cuanto se llevó a cabo un reconocimiento pensional contrariando el ordenamiento jurídico en la medida en que la liquidación de la pensión de vejez reconocida a favor del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón, se incurrió en una inconsistencia al momento de determinarse el ingreso base de liquidación, pues este se calculó teniendo en cuenta 1.779 semanas cotizadas, correspondiente al periodo comprendido entre el mes de julio de 2009 hasta el periodo de febrero de 2020, siendo correcto efectuar el cálculo con el último mes cotizado, a saber marzo de 2020, lo que varía levemente su ingreso base de liquidación y por ende su mesada pensional.

De los argumentos presentados, encuentra el Despacho que más que discutir la violación a disposiciones invocadas por parte del acto administrativo demandado, esto es, la Resolución No. SUB 85933 del 1º de abril de 2020, lo que pretende la entidad con la medida cautelar, es suspender el pago de una pensión devengada por el demandado al considerar que la liquidación de la misma contraviene las disposiciones inicialmente mencionadas.

Al respecto, se considera que suspender el pago de la pensión de vejez reconocida a favor del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón, por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en esta primera instancia del proceso podría perjudicar en parte el derecho al mínimo vital del que gozan las personas de la tercera edad; más un si se tiene en cuenta que el asunto sometido a discusión no corresponde al derecho pensional que ostenta el demandante sino que corresponde a la forma en que la entidad accionante efectuó la liquidación de la misma, aspecto que debe ser determinado previa valoración de las pruebas recaudadas en el curso del proceso.

Por tanto, se considera que las afirmaciones planteadas por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, llevan implícita la suspensión de la obligación de pagar el 100% de la pensión de vejez reconocida a favor del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón, lo cual no estaría acorde con las pretensiones de la demanda, pues no se cuestiona como tal el derecho pensional otorgado sino la forma en que se calculó el ingreso base de liquidación del mismo, las semanas cotizadas y los periodos que debieron tenerse en cuenta para su reconocimiento; aspecto que requiere de un análisis probatorio que trasciende el contenido del acto administrativo que se demanda.



Acceder en este momento procesal a la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución SUB 85933 del 01 de abril del 2020, mediante la cual Colpensiones reconoció una pensión de vejez a favor del señor Jorge Alberto Cuervo Garzón, podría constituir una decisión desproporcionada y contraria a los postulados constitucionales, pues en caso de encontrarse acreditado que al momento de efectuarse el reconocimiento pensional se incurrió en una inconsistencia o en un error aritmético al momento de establecer el ingreso base de liquidación, se debe estudiar la procedencia o no de un reajuste pensional, sin conllevar tal controversia a desconocer el derecho pensional reconocido a su favor, tal como se pretende con la solicitud de la medida provisional referida, solicitud que finalmente resulta contraria a las pretensiones de la demanda y a los fundamentos facticos del caso concreto.

De otro lado, se advierte que no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, toda vez que el apoderado judicial de la parte actora al momento de formular la medida de suspensión provisional, no refirió si quiera prueba sumaria para demostrar un detrimento patrimonial que afecte la sostenibilidad financiera de la Administradora Colombiana de Pensiones.

En síntesis, debe hacerse un estudio de fondo, con las pruebas aportadas al plenario, para determinar con certeza si efectivamente la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, incurrió o no en un error aritmético al momento de efectuarse el reconocimiento pensional, pues esta etapa procesal es apresurada para determinar tal situación y la existencia o no de un detrimento financiero a cargo de la entidad.

Así las cosas, al no encontrarse configurada a partir de un ejercicio de confrontación con las normas superiores que se argumentan como violadas, una situación de manifiesto desconocimiento necesaria para decretar la suspensión provisional solicitada, se procederá a negar el decreto de la medida cautelar bajo análisis.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Una vez ejecutoriado este proveído continúese con el trámite del proceso.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO**  
**JUEZ**

LCMS

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao  
Juez  
Oral 001



**Juzgado Administrativo**  
**Valle Del Cauca - Cali**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **39fd927c7c0695e130348c1b7d4af7fba98f3e7be6e8c98f3315dba0857eda3f**  
Documento generado en 24/08/2021 03:23:00 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**